

por los resultados de los estudiantes, aumenta la probabilidad de que éstas recurran a métodos ilegítimos si se enfrentan a una fuerte presión para obtener buenos resultados en las mediciones y a los principales obstáculos para tener un buen desempeño. Las que se mencionan con más frecuencia son las instituciones que restringen su admisión a estudiantes menos preparados y que reducen sus estándares de calificación y demandas de titulación para aumentar las tasas de finalización de sus programas.

CONSECUENCIAS POLÍTICAS

Como se analiza en nuestro informe de trabajo, los gobiernos deben actuar para abordar los impactos negativos del financiamiento basado en el desempeño. Los gobiernos deben proteger los estándares académicos y contrarrestar la tentación de restringir la admisión de estudiantes menos preparados y aventajados. Los estándares académicos pueden ser supervisados a través de evaluaciones de resultados de aprendizaje, informes obligatorios de cambios en las distribuciones de cargos y los requisitos de títulos, y encuestas anónimas al profesorado por si se sienten estresados para reducir los estándares académicos. Los gobiernos también pueden incentivar la admisión y la titulación de los estudiantes desfavorecidos mediante la inclusión de métricas para su acceso y éxito, como asimismo las misiones institucionales y la demografía estudiantil al evaluar los resultados de los estudiantes de una institución en particular. Los gobiernos también deben superar las barreras institucionales que provoca este tipo de financiamiento, con el fin de evitar que las instituciones recurran a medios ilegítimos. Para esto, los gobiernos pueden brindar fondos adicionales a las instituciones de educación superior para varios estudiantes desfavorecidos y ayudar a las instituciones a mejorar su capacidad para diseñar y aplicar cambios que respondan de manera eficaz a los requisitos del desempeño.

Educación gratuita en Chile: una política en espera

ANDRÉS BERNASCONI

Andrés Bernasconi es profesor de educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educativa (CJE). Correo electrónico: abernasconi@uc.cl.

Cuatro años después de su puesta en práctica, nadie en Chile parece “gustarle” la política de educación gratuita aplicada en 2016. Resulta sorprendente que la virtud más universalmente reconocida de la idea de educación gratuita sea su abrumador atractivo político: una idea tan popular que los electores no se sienten beneficiados. Aparte de los beneficiarios y sus familias, que están felices de no tener que pagar aranceles ni obtener un préstamo, ¿por qué casi nadie en el mundo académico, los partidos políticos ni las instituciones de educación superior en Chile apoyan esta política establecida por los legisladores en 2015?

DEFINICIÓN POCO CLARA DE LOS OBJETIVOS

Para empezar, el gobierno patrocinador de la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018) nunca articuló un motivo claro para terminar con los aranceles. Dado que la idea original era que la educación superior fuera gratuita para todos los estudiantes universitarios, sin hacer ninguna prueba, inclinar la balanza para beneficiar a los desfavorecidos no podría haber sido la meta. ¿Fue entonces el objetivo limitar la exposición a la deuda? Desde un ángulo político, como la deuda era alta en la lista de reclamos de los estudiantes, cientos de miles se movilaron en 2011 para protestar contra la mercantilización de la educación.

La presidenta Bachelet solía decir que la educación gratuita era una cuestión de principio: si la educación superior era un derecho de la gente, entonces tenía que ser gratuita. Sin embargo, el acceso abierto no restringido por el rendimiento académico nunca fue considerado como una propuesta paralela para hacer que la educación superior esté disponible para todos los egresados de secundaria (Chile tiene una prueba tipo SAT de admisión). Lo que se ofreció en cambio

fue un acceso gratuito, condicionado a pasar los filtros académicos de admisión establecidos por las instituciones. Lo anterior no asegura una mayor participación de los más vulnerables, ya que, en Chile, como en el resto del mundo, el rendimiento escolar y los altos puntajes en los exámenes dependen en gran medida de la formación académica de la clase social.

LA VISIÓN REALISTA DEL PRESUPUESTO Y LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN GRATUITA

Los objetivos confusos fueron una clara debilidad de la política de educación gratuita de Bachelet. El presupuesto nacional ha demostrado ser una segunda debilidad: una desaceleración de la economía y los ingresos fiscales limitados en el país acabaron con el sueño de la educación universal gratuita; además, los números fueron alterados. Es una historia demasiado larga para recapitarla en este artículo. En conclusión, la educación gratuita tenía que reservarse para los estudiantes de familias que se encuentren en los últimos seis deciles de ingresos y que se hayan matriculado en ciertas instituciones. En total, unos 340.000 estudiantes (30% del total de estudiantes universitarios) no pagan aranceles.

Para muchos partidarios de la izquierda política, esto está muy lejos de la visión de un sistema de educación superior liberado de las garras del mercado. Los críticos afirman que la educación gratuita es otra forma de subvención (un sistema de financiamiento per cápita que Chile adoptó desde el principio para su sistema escolar), que no ha hecho nada para sofocar la competencia entre las instituciones o fomentar la cooperación, y que—contrariamente a la voluntad del gobierno de Bachelet de centro izquierda para fortalecer las universidades públicas—ha dado como resultado una ganancia inesperada para las grandes instituciones privadas no selectivas con menores restricciones académicas. Además, la estructura de financiamiento mantiene los aranceles y los préstamos para ayudar a los estudiantes que no están exentos de pagar aranceles.

Mientras era oposición en el congreso, la derecha política, que ha estado en el poder desde que el presidente Sebastián Piñera asumió el cargo en 2018, al principio estaba en contra de la iniciativa de educación gratuita y la consideraba un desperdicio económico y una capitulación ante las demandas de los

estudiantes. No obstante, terminó votando por la propuesta del gobierno de Bachelet, una vez que se confirmara que las instituciones privadas no serían excluidas del programa. Como candidato, Piñera se comprometió pragmáticamente a mantener el programa de educación gratuita, ya que desmantelarlo habría sido un suicidio político.

PROBLEMAS DE DISEÑO

Aparte de la política, hay elementos en el diseño del programa que causan muchos problemas a los rectores universitarios del país. Para que funcione la educación gratuita, debe haber límites: como cuánto el gobierno pagará por cada estudiante matriculado, cuántos estudiantes pueden ser matriculados y por cuánto tiempo se brindarán estos beneficios. Los rectores mencionan que los límites actuales no son los adecuados y que son perjudiciales para las finanzas de las instituciones que se dedican a la investigación, donde los costos por estudiante son más altos que en los institutos. Primero, la asignación per cápita otorgada por el gobierno se basa en el arancel promedio por programa cobrado por todas las instituciones en cada uno de los cuatro niveles de acreditación. La idea es que las instituciones con mejor acreditación (es decir, cuya enseñanza sea probablemente más costosa) tengan mejores límites. Sin embargo, como las instituciones en cada grupo de acreditación son distintas en términos de calidad y nivel de funciones, planificar un promedio inevitablemente perjudica a las mejores de cada grupo.

Lo que se ofreció en cambio fue un acceso gratuito, condicionado a pasar los filtros académicos de admisión establecidos por las instituciones.

Una segunda restricción que afecta a los presupuestos de las instituciones es la extensión del beneficio en el tiempo: la educación gratuita solo dura el tiempo oficial de un programa educativo. Sin embargo, en la práctica, los estudiantes matriculados en programas que duran entre cuatro a cinco años suelen tardar entre 10% y 30% más de lo esperado en completar sus estudios, mientras que los alumnos en progra-

mas de títulos de asociado extienden sus estudios en 50%. Como resultado, cada año decenas de miles de estudiantes pierden sus beneficios en el tramo final de sus estudios.

Por último, para que la expansión de la admisión de estudiantes de primer año en las instituciones con educación gratuita no sea una amenaza para la estabilidad fiscal, ninguna institución puede aumentar la admisión en más de 2,7% por año. Esto ha tenido un efecto paradójico en el acceso. Durante dos décadas, el principal impulsor de un mayor acceso a la educación superior para los estudiantes menos privilegiados fue la expansión del sistema, a menudo en tasas de entre 5% y 7% por año. Estos estudiantes normalmente no obtienen los cupos más codiciados en las universidades más prestigiosas por los estudiantes de clase media alta con mejores calificaciones escolares y puntajes en los exámenes, por lo que su única opción era obtener un lugar en el sistema técnico y profesional o en universidades no selectivas. Todavía pueden hacerlo, pero a un ritmo mucho menor que en el pasado.

RESULTADOS DESCONOCIDOS

En general, el juicio final sobre los méritos e inconvenientes de la educación gratuita se basará en la evaluación de sus efectos en la distribución de oportunidades educativas, en las finanzas y el desarrollo institucionales y en quién gana y quién pierde. Los datos administrativos que se generan cada año en las postulaciones, las admisiones, el progreso y la titulación de los estudiantes pronto revelarán el aspecto educativo de los resultados. Una metodología mejorada para definir los límites de los aranceles se aplicará en el año 2020, a través de un foro de expertos que intentarán definir los costos de la educación por un “grupo” de programas. Este ajuste, junto con un patrón más saludable del crecimiento de la economía y los ingresos fiscales del país, pueden aliviar las inquietudes de los rectores sobre las finanzas. Por ahora, se mantienen la política de educación gratuita aparentemente popular, apoyada solo por su poderoso atrincheramiento y la dificultad del cambio.

Internacionalización “exitosa”: visión europea

A *International Higher Education* le gustaría agradecer a la Corporación Carnegie de Nueva York (CCNY) por su apoyo para abordar la educación superior en África y por su apoyo general a nuestra publicación. CCNY ha reconocido por mucho tiempo la importancia de la educación superior en África y en otras latitudes, y esta generosidad posibilita nuestro trabajo y el de nuestro socio en la Universidad de Kwa-Zulu-Natal en Sudáfrica, lugar de la Red Internacional para la Educación Superior en África (INHEA, por sus siglas en inglés).

LAURA E. RUMBLEY, ROSS HUDSON Y ANNA MALIN SANDSTRÖM

Laura E. Rumbley es directora asociada de Investigación y Desarrollo del Conocimiento, Ross Hudson es director senior en conocimiento y Anna-Malin Sandström es directora de políticas de la Asociación Europea para la Educación Internacional, Ámsterdam, Países Bajos. correos electrónicos: rumbley@eaie.org, hudson@eaie.org y sandstrom@eaie.org. Este artículo está basado en un informe de los autores del “Barómetro de la EAIE: las señales de éxito”, publicado por la Asociación Europea para la Educación Internacional en abril de 2019 y está disponible en www.eaie.org/barometer.

Los debates sobre la internacionalización en la Educación superior en Europa y en otros lugares se enfocan cada vez más en comprender el impacto que tiene la internacionalización, como también los procesos que deben seguir las instituciones de educación superior (IES) para alcanzar sus objetivos de internacionalización (y otros).

La importancia de la dimensión internacional ha llevado a las IES a adoptar más enfoques estratégicos para el desarrollo y el resultado de la internacionalización. Con el fin de equipar a los profesionales encargados del desarrollo y la ejecución de estrategias de internacionalización institucional en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con las pruebas más adecuadas para informar su toma de decisiones, la Asociación Europea para la Educación Internacional (EAIE, por sus siglas en inglés) escribió el Barómetro EAIE: Informe de la internacionalización en Europa (segunda edición, 2018). La encuesta en la que se basa el informe recopiló respuestas de 2.317 profesionales que trabajan directamente en internacionalización en